



**NACIONES UNIDAS**  
**CONSEJO**  
**ECONÓMICO**  
**Y SOCIAL**



Distr.  
GENERAL

E/CN.4/1156  
8 mayo 1974  
ESPAÑOL  
ORIGINAL: INGLÉS

COMISION DE DERECHOS HUMANOS  
31.º período de sesiones

INFORMES PERIODICOS SOBRE DERECHOS HUMANOS

Informes sobre derechos económicos, sociales y culturales,  
correspondientes al período comprendido entre el 1º de julio  
de 1969 y el 30 de junio de 1973, recibidos de los organismos  
especializados en virtud de la resolución 1074 C (XXXIX) del  
Consejo Económico y Social

	<u>Página</u>
Organización Meteorológica Mundial . . . . .	2
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura . . . . .	3

ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL

/22 de febrero de 1974/

1. Se ha hecho notar debidamente que el informe tiene que presentarse con arreglo a los epígrafes preparados por la Secretaría de las Naciones Unidas de conformidad con el párrafo 4 de la resolución 16 B (XXIII) de la Comisión de Derechos Humanos. La OMM no tiene información concreta que ofrecer con arreglo a esos epígrafes, dado que no guardan relación con sus actividades, que se refieren exclusivamente a cuestiones científicas y técnicas en la esfera de la meteorología. Sin embargo, se suministran a continuación algunas informaciones de carácter general.

2. Se han señalado a la atención del Congreso de la OMM las resoluciones de las Naciones Unidas relativas a los derechos humanos y a la discriminación racial que contienen solicitudes dirigidas a los organismos especializados y han sido remitidas a la Organización. El Congreso se reúne cada 4 años; el último Congreso se celebró en 1971. Se reproducen a continuación las partes pertinentes del informe de la reunión del Congreso de 1971:

"5.3.11 El Congreso condena categóricamente las políticas de discriminación racial y de dominación colonial practicadas por los Gobiernos de Sudáfrica y de Portugal en Africa. Se señaló que dichas prácticas inhumanas no sólo constituyen una negación de la dignidad y de los derechos humanos fundamentales de la población autóctona de Sudáfrica y de los territorios coloniales portugueses de Africa, sino que también llevan consigo la opresión de la mayoría por una minoría.

5.3.12 Por las expresadas razones, el Congreso observó con preocupación que las políticas discriminatorias y colonialistas practicadas por los Gobiernos de Sudáfrica y de Portugal no son propicias al desarrollo de la colaboración técnica y científica necesaria para el logro de los objetivos de la OMM, y que ello debía señalarse a la atención de los países interesados.

5.3.13 El Congreso estima que los referidos países deben adoptar medidas urgentes para modificar su política discriminatoria y colonialista."

/...

ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION,  
LA CIENCIA Y LA CULTURA

/4 de abril de 1974/

I. Descripción preliminar concisa de las políticas generales de desarrollo económico y social que han contribuido significativamente a garantizar el reconocimiento, la efectividad y la protección de los derechos económicos, sociales y culturales durante el período comprendido entre el 1.º de julio de 1969 y el 30 de junio de 1973

- a) El problema de la aplicación de las disposiciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos se ha examinado de una forma u otra en todas las reuniones de la Conferencia General de la UNESCO.

Cabe hacer notar que todo el programa de la UNESCO tiene relación con la aplicación de los principales derechos sociales, económicos y culturales: el derecho a la educación, el derecho a la cultura, el derecho a la información, la repercusión de la estructura social en el acceso a los derechos humanos y la definición de los derechos humanos, el significado intrínseco de los derechos y los fundamentos filosóficos de los derechos humanos.

- b) Dentro de ese marco general, merecen atención especial algunos sectores que plantean problemas, por ejemplo, el racismo, el colonialismo, el apartheid y los derechos de la mujer.

II. Influencia que ejercen los instrumentos de las Naciones Unidas en que constan principios y normas para el reconocimiento, la realización y la protección de los derechos económicos, sociales y culturales y, en particular, medidas adoptadas para aplicar tales instrumentos durante el período comprendido entre el 1.º de julio de 1969 y el 30 de junio de 1973

- a) Cabe advertir que resulta difícil, si no imposible, responder a este epígrafe. No es fácil evaluar la influencia que ejercen los instrumentos de las Naciones Unidas. Ellos no actúan nunca en el vacío, sino conjuntamente con otras presiones de carácter social, económico y político. Aún la ratificación de las convenciones de las Naciones Unidas no equivale necesariamente a la aplicación. Se puede proceder a esa ratificación por toda clase de razones. Resulta particularmente difícil evaluar "los progresos" en una esfera social aislada. En realidad, los indicios señalan que en 1974, al igual que en 1969, el principio de la igualdad y por lo menos cierta redistribución del acervo económico y social interno siguen sin lograrse. Al mismo tiempo, las expectativas sociales aumentan, especialmente entre los sectores menos privilegiados de la comunidad. Cabe subrayar que hay dos problemas principales: i) el desequilibrio de la riqueza entre los Estados, y ii) la distribución de la riqueza dentro de los Estados.

b) Convención y Recomendación relativas a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza (1960)

Estas dos normas internacionales, que establecen instrumentos para la promoción de los derechos humanos en la enseñanza, fueron aprobadas el 14 de diciembre de 1960 por la Conferencia General, en su 11a. reunión.

Los primeros informes especiales de los Estados Miembros (Doc. 12 C/11) sobre las medidas tomadas por ellos respecto de la Convención y de la Recomendación, fueron presentados a la Conferencia General en su 12a. reunión, celebrada en 1962. Posteriormente, el Comité Especial del Consejo Ejecutivo sobre las Convenciones y Recomendaciones en la Esfera de la Enseñanza ha examinado en distintas ocasiones los informes periódicos de los Estados Miembros acerca de la aplicación de la Convención y de la Recomendación. Los análisis de esos informes, el último de los cuales se preparó en 1972, aparecen en los documentos 14 C/29, 14 C/29 Add.I, II, III, V y VI, 15 C/10, 15 C/10 Add.I, 15 C/11 y 17 C/15.

Al 30 de junio de 1973 se habían depositado en poder del Director General instrumentos de ratificación o aceptación de la Convención, o de adhesión a ella, en nombre de 60 Estados. Durante el período correspondiente a este informe se depositaron instrumentos en nombre de Chile, Chipre, España, Finlandia, Libia, Luxemburgo, Mauricio, Nigeria, Swazilandia y Túnez.

c) Protocolo para instituir una Comisión de Conciliación y Buenos Oficios facultada para resolver las controversias a que pueda dar lugar la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la esfera de la Enseñanza

El Protocolo, que fue aprobado el 10 de diciembre de 1962 por la Conferencia General en su 12a. reunión, entró en vigor el 24 de octubre de 1968. Al 30 de junio de 1973, 21 Estados lo habían ratificado o aceptado o se habían adherido a él.

En su 16a. reunión, la Conferencia General eligió a los 11 miembros de la Comisión, que celebró su primera reunión del 1.º al 3 de febrero de 1971 para elegir a su Presidente y a su Vicepresidente, así como para redactar su reglamento.

d) Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales (1970)

Este instrumento, cuyo objetivo está contenido implícitamente en su título, fue aprobado el 14 de noviembre de 1970 por la Conferencia General en su 16a. reunión. A fines del período comprendido por el presente informe, se habían depositado en poder del Director General instrumentos de ratificación o aceptación de la Convención, o de adhesión a ella, en

nombre de Argentina, Brasil, Bulgaria, Camerún, Ecuador, Egipto, Irak, Kuwait, Libia, México, Níger, Nigeria, República Centroafricana, República Dominicana, República Khmer y Yugoslavia.

- e) Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural (1972) y Recomendación sobre la protección, en el ámbito nacional, del patrimonio cultural y natural (1972)

Estos instrumentos fueron aprobados el 16 de noviembre de 1972 por la Conferencia General, en su 17a. reunión. Al 30 de junio de 1973, ningún Estado había ratificado o aceptado la Convención ni se había adherido a ella.

- f) Formulación de nuevas normas internacionales

En cumplimiento de las disposiciones de la resolución 3.411, aprobada por la Conferencia General en su 17a. reunión, celebrada en 1972, el Director General ha estado estudiando los aspectos técnicos, jurídicos y administrativos de:

- i) el intercambio de objetos y ejemplares originales entre las instituciones de diversos países,
- ii) la conservación de barrios históricos y de ciudades históricas situadas en un medio urbano moderno,
- iii) la acción tendiente a asegurar el libre acceso democrático de las masas populares a la cultura y su participación activa en la vida cultural de la sociedad.

Dichos estudios serán presentados a la Conferencia General, en su 18a. reunión, a fin de que ésta decida si cabe reglamentar esas cuestiones en el plano internacional.

- III. Acontecimientos de importancia en relación con el reconocimiento, la realización y la protección de los derechos económicos, sociales y culturales durante el período comprendido entre el 1º de julio de 1969 y el 30 de junio de 1973, con referencia, en su caso, a las disposiciones constitucionales, las medidas legislativas y los reglamentos y procedimientos administrativos promulgados y los fallos dictados por los tribunales

Este epígrafe es cuando menos tan difícil de evaluar como el II. Cabría incluir como acontecimientos de importancia: a) la presión ejercida por grupos minoritarios que ha dado por resultado el reconocimiento de la diversidad de culturas, el problema de la centralización política, los distintos grados de acceso a la enseñanza, etc.; b) el aumento de precios de los productos primarios, que ha añadido una nueva dimensión al problema del desarrollo; c) la impugnación de los

medios y fines en los Estados democráticos liberales; d) la creciente desilusión en la esfera de los derechos humanos por la represión cada vez mayor en algunos Estados y la exclusión de algunos sectores de la población; e) el diálogo creciente sobre la paz, el significado de la paz y los requisitos estructurales para la paz.

D. El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental

D.1. La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el logro del sano desarrollo de los niños

De 1968 a 1972, el Departamento de Ciencias Sociales ofreció los servicios de un antropólogo social para el proyecto sobre "el acceso de la mujer a la enseñanza en el Alto Volta". Aunque el proyecto se relacionaba primordialmente con la alfabetización funcional, uno de los efectos secundarios fue la disminución de la mortinatalidad en tres aldeas mediante la incorporación de métodos simples de higiene en la tradición local de alumbramientos. Las cooperativas algodoneras también fueron familiarizadas con esos métodos mediante la tradición de "ayuda" entre las mujeres Mossi en el Alto Volta.

D.2. El mejoramiento de todos los aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente

La UNESCO colaborará en los preparativos de un simposio que será organizado por la Asociación Internacional de Ciencias Jurídicas y que tendrá lugar en México en 1974, sobre los "Problemas que se les plantean a los países en desarrollo en la promulgación y aplicación del derecho relativo al medio ambiente".

Además, se prevé para más adelante (proyecto del documento 18 C/5) la realización de investigaciones sobre el derecho relativo al medio ambiente en tres regiones del mundo y, en especial, sobre "La función de las disposiciones jurídicas relativas a la protección y al mejoramiento del medio ambiente".

F. El derecho a la educación

F.1. Derecho a la enseñanza primaria gratuita

Los Estados Miembros fueron consultados por segunda vez sobre la aplicación de la Convención y de la Recomendación relativas a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza en 1971 y 1972, y dicha consulta suministró a la Secretaría informes de 55 Estados Miembros, 41 de los cuales se recibieron a tiempo para su análisis por el Comité Especial del Consejo Ejecutivo sobre las Convenciones y Recomendaciones en la esfera de la Enseñanza. Respecto de la aplicación del derecho a la enseñanza primaria gratuita, 32 de los 41 Estados Miembros que presentaron sus informes a tiempo ya han implantado de jure la enseñanza primaria gratuita y obligatoria.

Sin embargo, la aplicación efectiva de esas leyes es desigual. Es así que la República de Corea y las Islas Salomón informaron que la enseñanza primaria no era aún totalmente gratuita, mientras que Nigeria dijo que era gratuita en algunas partes del país. En la India, son gratuitos los primeros cinco años, período que corresponde aproximadamente a la enseñanza elemental. En Hong Kong, se concede a los niños pobres una disminución del 20% sobre el pago de sus derechos de matrícula y enseñanza y se tenía el propósito de abolir totalmente todos esos pagos en 1971. En cambio, en los países o territorios que informaron que la enseñanza primaria era gratuita (Checoslovaquia, Chipre, Francia, Italia, Japón, Senegal, Islas Seychelles y URSS) se distribuyen también libros de texto a los alumnos y a veces se proporcionan gratuitamente otras facilidades tales como transporte, ropa, comidas y alojamiento.

F.2. Derecho a la igualdad de acceso a la enseñanza superior, sobre la base de la capacidad o el mérito, incluso la enseñanza técnica, vocacional y profesional

En la misma consulta periódica que se dirigió a los Estados Miembros se pidió información sobre las medidas adoptadas para que la educación superior fuese accesible a todos sobre la base de la capacidad individual. Sin embargo, los informes recibidos de los Estados Miembros no siempre son detallados a este respecto. Es así que algunos países meramente señalaron que dicha educación estaba al alcance de todos, o de todos los que poseían la preparación necesaria. En ocho países (Argentina, Bélgica, Ceilán, Francia, Italia, República Árabe Siria, Senegal y Uruguay), todos los estudiantes que han terminado sus estudios secundarios o han obtenido certificado de egreso tienen acceso a la educación superior.

No obstante, Italia manifiesta que en el caso de ciertas asignaturas, se requiere un curso preparatorio ulterior; la República Árabe Siria declara que los estudiantes deben obtener las calificaciones requeridas por las diversas facultades; y Bélgica responde que es más difícil ingresar en la educación superior cuando se proviene de escuelas técnicas o profesionales, pues las asignaturas que se enseñan en ellas son muy diferentes. La Argentina indica que en la Universidad de Buenos Aires un examen especial elimina hasta el 60% de los candidatos. El Uruguay considera que el acceso a la educación superior debe depender tanto de la aptitud concreta como de las necesidades económicas del país. En Francia, los que no han obtenido su baccalauréat pueden presentarse a un examen de ingreso después de cinco años de empleo, y una ley promulgada en 1968 dispone que los trabajadores que no han obtenido su baccalauréat tienen derecho a asistir a clases nocturnas.

Al parecer, la existencia de diferentes formas de educación secundaria en varios Estados y los nuevos procedimientos que facilitan los traslados de un tipo de escuela secundaria a otra ayudan indirectamente a ampliar el acceso a la educación superior. No obstante, Suiza señala que, debido al número de alumnos que siguen estudios de capacitación técnica y profesional, sólo el 6% de los estudiantes que han terminado la escuela secundaria ingresan en la universidad.

En el caso de la República Federal de Alemania y el Senegal, los candidatos que no han obtenido su certificado de egreso deben pasar un examen de ingreso o una prueba especial de aptitud. El Senegal agrega que, entre las personas que poseen los certificados necesarios, a menudo sólo los que tienen becas para realizar estudios superiores pueden ingresar a la universidad. El Gobierno asiste a los demás dándoles facilidades para que continúen sus estudios en el Centre des oeuvres universitaires. Australia manifiesta que, contrariamente a lo que dijo en su primer informe periódico (véase UNESCO 15 C/11, párr. 570), ya no se puede ofrecer educación secundaria a todos los que llenan los requisitos necesarios, a pesar del mayor número de universidades, que, en casi todos los casos, aplican un sistema de cuotas.

También puede tenerse acceso mediante concurso. Este sistema funciona en ocho Estados (Bulgaria, Líbano, Polonia, RSS de Bielorrusia, RSS de Ucrania, Rumania, Turquía, URSS). Cabe señalar que se permite a los estudiantes rumanos expresarse en el idioma de su minoría étnica en el caso de las asignaturas que se enseñan en ese idioma y que en Polonia se conceden a los hijos de los trabajadores y campesinos cinco puntos adicionales en el examen. Tanto en Australia como en la República Federal de Alemania, el ingreso de estudiantes está restringido por un numerus clausus en el caso de algunas asignaturas. Mientras que en la República Federal de Alemania se están considerando medidas para acelerar la construcción de nuevas instituciones, en Australia una amplia variedad de instituciones no universitarias ofrecen la oportunidad de cursar estudios superiores. En la República de Corea, los candidatos también deben pasar un examen de ingreso, salvo en asignaturas de humanidades y educación física. El sistema de cuotas que funciona en este país, conjuntamente con la desfavorable situación económica y la persistencia de las tradiciones, puede resultar en que se niegue ingreso a la universidad a estudiantes preparados provenientes de instituciones superiores de capacitación técnica o profesional. El Líbano señala la discriminación de facto que ocasionan los derechos de matrícula impuestos por las universidades privadas y al número limitado de cursos especializados, así como el sistema de selección mediante concurso.

En los informes provenientes de cinco Estados (Dinamarca, Hungría, Malta y Nueva Zelandia (Guernsey)) se señala que el acceso a la educación superior depende de la capacidad intelectual del alumno. Turquía manifiesta que las aptitudes se determinan en el examen de ingreso, pero que también se toman en consideración las necesidades del país. Polonia también declara que se tienen en cuenta tanto la capacidad de los estudiantes como las necesidades nacionales, pues el número de estudiantes deseosos de ingresar en la universidad excede del número de vacantes. Cuatro países (Australia, Canadá, India, y República Federal de Alemania) anuncian la creación de nuevas instituciones de enseñanza superior, mientras que otros dos (Noruega y RSS de Bielorrusia) dicen que en los distritos rurales se están proporcionando nuevas oportunidades de educación a este nivel y que el número de estudiantes está aumentando. Cuatro países (Hungría, Italia, Líbano y Sri Lanka) manifiestan que los extranjeros tienen las mismas oportunidades de ingreso a la educación superior que los nacionales; uno de ellos (Italia) menciona la equivalencia de preparación como condición.



Para que la educación superior sea accesible a todos, es necesario poner a prueba la capacidad de los posibles estudiantes y también darles medios de subsistencia para varios años de estudio. En su gran mayoría, los Estados y los territorios dependientes de los Estados Miembros han hecho todos los esfuerzos posibles por lograr ese objetivo. En primer lugar, diez Estados (Checoslovaquia, Malta, Noruega, República Árabe de Egipto, República Árabe Siria, RSS de Bielorrusia, RSS de Ucrania, Sri Lanka, Uruguay y Venezuela) dicen que la enseñanza es gratuita. Bajo otro epígrafe, la URSS manifiesta que la educación es gratuita en todo su territorio. Malta indica que la enseñanza en las escuelas de formación normalista y en la Escuela Superior de Humanidades, Ciencias y Tecnología es gratuita, y Venezuela señala que, según la ley, puede negarse la educación gratuita en los casos en que la familia del estudiante cuenta con recursos propios. Aunque la educación es gratuita, los países citados - así como también la mayoría de los que contestaron a esta parte del cuestionario - hacen arreglos para la prestación sistemática de asistencia a los estudiantes, ya sea en efectivo o en especie. Dicha asistencia se concede de conformidad con criterios establecidos, basados en la capacidad del estudiante para realizar estudios universitarios y en los resultados de sus exámenes, así como en los recursos económicos de su familia y, a veces, también en la distancia entre su domicilio y el lugar en que estudia.

En las respuestas recibidas de 35 Estados se señala que se suministran diversas formas de ayuda financiera - becas, préstamos y subsidios de diferentes tipos - o muchas otras formas de asistencia que a veces puede ser acumulativa. Dichas formas de asistencia, que suelen estar previstas en la Constitución o en las leyes, son concedidas por el Estado, pero los estudiantes también pueden obtener ayuda en forma de becas u otras ventajas de órganos privados que, en algunos casos, reciben apoyo del Gobierno. Habitualmente se presta asistencia a los estudiantes que concurren a universidades e institutos técnicos o profesionales y a los que asisten a escuelas de formación normalista. Dicha asistencia puede ser meramente una exención de los derechos de matrícula o puede revestir la forma de becas que cubra la totalidad de los gastos de un estudiante. Asimismo, puede estar sujeta a selección, generalmente sobre la base del mérito o las necesidades, o también puede facilitarse a todos los estudiantes, o a todos los que sean nacionales del país. En algunos países, los estudiantes extranjeros tienen derecho a recibir ayuda conforme a algunas condiciones.

Los informes provenientes de varios Estados contienen interesantes detalles sobre los tipos de asistencia prestada a los estudiantes y a menudo se remiten a disposiciones legislativas o administrativas. Australia informa de que el 50% de los estudiantes reciben asistencia. Chipre menciona la creación en 1971, de una fundación pública para dar becas a estudiantes capaces que estén necesitados. Un tercer país (República Árabe Siria) manifiesta que, además de diversas formas de asistencia financiera, se conceden premios a estudiantes destacados. En los Estados Unidos se organizó en 1970 un programa de servicios especiales para asistir a muchos estudiantes impedidos y desvalidos de ese país. En 1968, con miras a lograr la igualdad de oportunidades, otro país (Argentina) creó un Instituto nacional de préstamos para la educación que permite conceder un número mucho mayor de becas. La Argentina también menciona que dispone de servicios sanitarios y de bienestar

estudiantil, al igual que de albergues y restaurantes de precios reducidos. Otro país más (República de Corea) informa de que en 1971, bajo los auspicios del Ministerio de Educación, se creó la "Fundación Coreana de Becas" que para 1975 posibilitará que se concedan becas a cinco veces más estudiantes que en 1971. En 1969 un territorio dependiente de un Estado miembro (Hong Kong) estableció un plan de asistencia oficial para ayudar a estudiantes necesitados en dos universidades locales. El mismo Estado informa de que cualquier residente del país (Reino Unido (Escocia)) que comience estudios superiores tiene derecho a recibir asistencia financiera, mientras que en otro territorio del mismo Estado (Guernsey) y en cuatro de sus territorios dependientes (Islas Seychelles, Islas Salomón, Islas Turcas y Caicos e Islas Vírgenes) que no tienen medios para impartir educación superior, se concede asistencia financiera a los alumnos que se consideran capacitados para continuar sus estudios en el extranjero y uno de estos últimos territorios (Islas Salomón) observa que en 1970 el número de estos subsidios era 10 veces mayor que en 1966.

Otros ocho Estados (Bulgaria, Nigeria, Polonia, Rumania, República Árabe de Egipto, RSS de Bielorrusia, RSS de Ucrania y Senegal) suministran información sobre otros tipos de asistencia a los estudiantes. Además de concedérseles diversos subsidios, se ayuda a esos estudiantes proporcionándoles albergues, comidas económicas, asistencia médica gratuita y transporte. Tres de los Estados mencionados (Bulgaria, Polonia y RSS de Bielorrusia) manifiestan que los trabajadores tienen licencia paga cuando se presentan a exámenes y también cuando toman cursos por correspondencia. En otro Estado (Nigeria), se insta a las empresas locales de carácter comercial e industrial, a que ofrezcan trabajo a los estudiantes durante las vacaciones. Un Estado (Rumania) dice que los estudiantes cuyas calificaciones sean excepcionales pueden recibir becas en cuyo monto no influyen las circunstancias familiares. En un país (Irak), varias medidas para prestar asistencia destinadas a fomentar la expansión de la educación superior forman parte del actual Plan Nacional de Desarrollo.

### F.3. Derecho de los padres a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos

El derecho de los padres a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos está íntimamente vinculado a la tolerancia por parte del Estado de las escuelas privadas. Se formuló un interrogante relativo a dichos establecimientos de enseñanza a los Estados Miembros en la segunda consulta sobre la aplicación de la Convención y Recomendación relativas a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza. Aunque el cuestionario sólo se refería a las normas establecidas o aprobadas para dichas escuelas en relación con la educación dada en ellas, las respuestas recibidas en muchos casos iban más allá y daban detalles sobre la creación de dichas instituciones, su condición jurídica y los requisitos de admisión a éstas.

Veintinueve Estados (Argentina, Australia, Bélgica, Canadá, Chipre, Dinamarca, Estados Unidos de América, Francia, Irak, Japón, Líbano, Malta, Nueva Zelandia, Nigeria, Noruega, Países Bajos (Antillas), Panamá, Reino Unido (Escocia, Guernsey),

Gibraltar, Hong Kong, Islas Gilbert y Ellice, Islas Salomón, Islas Seychelles, Islas Vírgenes, República Árabe de Egipto, República Árabe Siria, República de Corea, República Federal de Alemania, Senegal, Sri Lanka, Suiza, Turquía, Uruguay, Venezuela y Zambia) contestaron que había escuelas privadas en su territorio. Un Estado (Hungría), si bien señaló que no había escuelas privadas en el país, agregó empero que se permite a las iglesias mantener un número establecido de escuelas religiosas. Otro Estado (Polonia), conforme a una ley de educación de 1961, autoriza la existencia de instituciones no gubernamentales de enseñanza y bienestar social. Otros cinco Estados (Checoslovaquia, RSS de Bielorrusia, RSS de Ucrania, Rumania y URSS) contestaron que no había escuelas privadas en su territorio y uno de ellos señaló que todas las escuelas de dicha índole habían sido abolidas en 1944. En los países en que existen esas escuelas, su propósito parece consistir a menudo en complementar los servicios de enseñanza facilitados por las autoridades públicas y no en excluir a un determinado grupo social. Algunos Estados mencionan concretamente este aspecto o reconocen el servicio social que las escuelas privadas prestan al país. Este es, indudablemente, el significado que debe atribuirse a la respuesta de Venezuela, cuya Constitución prevé el fomento y protección de dichas escuelas. Otros tres Estados informan de que las escuelas privadas representan entre el 13 y el 15% de todo el sistema escolar (Panamá y Senegal) y que estas escuelas atienden a cerca del doble de alumnos que los que están matriculados en las escuelas públicas (Líbano). En la República de Corea hay el doble de universidades privadas que de instituciones públicas de educación superior.

Otro Estado (Chipre) menciona que las escuelas privadas que atienden a los intereses de un determinado sector de la población casi han duplicado su número desde 1966 y que, desde entonces, han cuadruplicado su matrícula, a pesar de que no reciben subsidios del Gobierno.

El Líbano agrega que a causa de los elevados derechos de matrícula de dichas escuelas, sólo las clases acomodadas de la población pueden concurrir a ellas; otro Estado (Estados Unidos de América) informa sobre el desarrollo de la educación privada con la intención de excluir a algunos sectores de la población. En cambio, dos Estados informan o bien de que las escuelas privadas que reciben subsidios deben reservar vacantes para titulares de becas del Estado (como ocurre en Panamá), o bien de que no se permite a dichas escuelas discriminar respecto de la admisión de alumnos.

Las escuelas privadas imparten educación primaria en Turquía (donde también hay escuelas privadas de enseñanza preprimaria) a menudo, secundaria, y, en algunos casos, incluso superior.

Las escuelas privadas pueden atender a los intereses de grupos lingüísticos especiales y a menudo son de naturaleza religiosa. No obstante, el Senegal informa de que las escuelas católicas del país también admiten a niños que no son católicos, pues la enseñanza religiosa no es obligatoria conforme al sistema de enseñanza laica del país.

## G. El derecho a tomar parte libremente en la vida cultural

### G.1. Derecho a tomar parte en la vida cultural y a gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones

La Conferencia Intergubernamental sobre los Aspectos Institucionales, Administrativos y Financieros de las Políticas Culturales (Venecia, agosto de 1970) afirmó que "si todos los hombres tienen derecho como exigencia de su dignidad esencial, a participar en el patrimonio y en la actividad cultural de la comunidad ... se deduce que las autoridades que tienen a su cargo esas comunidades tienen el deber de facilitarles los medios, dentro de los límites de los recursos de que disponen, para esa participación". Sobre esta base y reconociendo que para asegurar el derecho a la cultura de los individuos y de los pueblos y para encarar los peligros que amenazan a la cultura, los gobiernos tienen el deber de establecer políticas culturales claras y coherentes, la Conferencia formuló una serie de recomendaciones dirigidas a los Estados miembros de la UNESCO.

La Conferencia recomendó en particular que la UNESCO "busque los modos y los medios de ayudar a los Estados miembros a garantizar la protección de las culturas indígenas contra las influencias externas nocivas (Res. 4); y "que la UNESCO fomente los estudios que permitan formular estrategias de acción cultural que respondan a las necesidades de los individuos y de las naciones ..." (Res. 18).

El programa de la UNESCO sobre el desarrollo cultural está basado desde 1971-1972 en las recomendaciones de esa Conferencia y, a partir de 1973, se apoya asimismo de las recomendaciones de la Conferencia Intergubernamental sobre las Políticas Culturales en Europa (Helsinki, junio de 1972).

La Conferencia de Helsinki reafirmó unánimemente la necesidad de promover el desarrollo cultural como factor del desarrollo integral y como corolario del derecho humano a la cultura, reconocido como una dimensión esencial de la vida humana y como una exigencia y una necesidad de todos y no ya el privilegio de una minoría selecta. Estos conceptos, que ya fueron afirmados en Venecia, han sido profundizados y las condiciones y modalidades de su aplicación se han delimitado en el contexto de las realidades socioculturales y económicopolíticas europeas. La Conferencia subrayó la necesidad de ampliar cada vez más el acceso y la participación en la cultura de todas las categorías sociales y recomendó a la UNESCO (Rec. 2): "que, en las investigaciones sobre cuestiones de política cultural, dedique especial atención a estudiar los problemas que plantea el acceso de las masas trabajadoras a la cultura y su participación más activa en la vida cultural de la sociedad, así como los que plantea la influencia que ejercen los distintos factores culturales en la formación y el desarrollo del universo intelectual del hombre, las necesidades espirituales de los distintos sectores de la población, el empleo racional del tiempo libre de los trabajadores en actividades de carácter cultural y educativo, etc."; y "que en su programa futuro prevea la preparación de un proyecto de instrumento internacional destinado a garantizar a las masas populares el acceso libre y democrático a la cultura y su participación activa en la vida cultural de la sociedad". (Véase también el capítulo II).

En 1968, el Departamento de Ciencias Sociales celebró una reunión de expertos sobre los derechos culturales como derechos humanos 1/. En 1971, se celebró una reunión como continuación de la anterior sobre la influencia del colonialismo en el artista, su medio y su público en los países en desarrollo 2/. Además, el Departamento encargó una serie de estudios sobre el acceso a las culturas de minorías selectas. En el Centro de Estudios Culturales Contemporáneos de la Universidad de Birmingham se realizó un estudio monográfico sobre la cultura de la clase trabajadora en torno al Double Zero Club.

G.2. Derecho a la protección de los intereses morales y materiales que resulten de las producciones científicas, literarias o artísticas

Durante el período que se examina (1.º de julio de 1969 a 30 de junio de 1973), la UNESCO ha llevado a cabo numerosas actividades relativas al párrafo 2 del artículo 27 2) de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Estas tareas están generalmente comprendidas en las siguientes categorías:

Aplicación y desarrollo de las convenciones relativas al derecho de autor y otros derechos conexos

i) . Convención Universal sobre Derecho de Autor

En el período comprendido entre el 5 y el 24 de julio de 1971, tuvo lugar en la sede de la UNESCO, París, una Conferencia Internacional de Estados con el propósito de revisar la Convención Universal sobre Derecho de Autor, aprobada en Ginebra en 1952. El propósito de esa revisión, que estuvo íntimamente coordinada con la revisión concurrente de la Convención universal para la protección de las obras literarias y artísticas (Convención de Berna), fue extender los derechos básicos que garantizaban los intereses económicos de los autores, incluidos los derechos exclusivos a autorizar la reproducción y la representación y radiodifusión públicas, y poner al alcance de los países en desarrollo sistemas de licencia obligatoria limitados respecto de las traducciones y reproducciones.

La idea de revisar la Convención Universal sobre Derecho de Autor fue formulada por primera vez en 1966, durante la 14a. reunión de la Conferencia General de la UNESCO. Sin entrar en detalles respecto del trabajo preparatorio que precedió a la Conferencia de Revisión, cabe mencionar al Grupo Mixto de Estudio del Derecho Internacional de Autor, que se reunió en Washington entre el 29 de septiembre y el 3 de octubre de 1969. Luego de un intercambio de opiniones sobre la situación total de las relaciones internacionales en el campo de los derechos de autor, el Grupo de Estudio aprobó un texto conocido como la "Recomendación de Washington", en el que se disponía, entre otras cosas, que la Convención Universal sobre Derecho de Autor y la Convención de Berna fuesen revisadas simultáneamente en conferencias que se celebrasen en el mismo lugar y al mismo tiempo a fin de asegurar que se realizaran ciertos cambios concretos en los textos de ambas Convenciones.

---

1/ UNESCO, París, julio de 1968.

2/ Dar-es-Salaam, Tanzania, julio de 1971.

Después de expresar la opinión de que la preparación de la revisión de la Convención Universal sobre Derecho de Autor debería realizarse de conformidad con las consideraciones enunciadas en la "Recomendación de Washington" y las disposiciones contenidas en la misma, el Comité Intergubernamental de Derecho de Autor de la Convención Universal sobre Derecho de Autor estableció en su 10a. reunión ordinaria (15 a 19 de diciembre de 1969) un Comité Preparatorio Ad Hoc, que se reunió en la sede de la UNESCO, París, del 11 al 15 de mayo de 1970, para preparar un proyecto preliminar de propuestas para la revisión de la Convención. En su segunda reunión extraordinaria, celebrada en la sede de la UNESCO, París, del 2 al 11 de septiembre de 1970, el Comité Intergubernamental aclaró las propuestas de revisión elaboradas por el Comité Preparatorio Ad Hoc. En su 16a. reunión, la Conferencia General de la UNESCO, después de tomar nota del estado de los preparativos para la revisión de la Convención Universal, autorizó al Director General a "adoptar las medidas apropiadas en preparación para la conferencia que revisará la Convención Universal sobre Derecho de Autor".

La Convención Universal revisada, junto con sus dos Protocolos Anexos relativos a la protección de las obras de determinadas organizaciones internacionales y a la protección de las obras de las personas apátridas y de los refugiados fue aprobada por la Conferencia diplomática del 24 de julio de 1971 y quedó abierta a la firma de los Estados partes en la Convención de 1952 en esa fecha. La Convención Universal revisada entrará en vigor tres meses después de que se depositen doce instrumentos de ratificación, de aceptación o de adhesión. Hasta el 1.º de enero de 1974, diez Estados habían ratificado la Convención revisada o se habían adherido a ella.

La aprobación de los textos de París de la Convención Universal y de la Convención de Berna reavivó el interés en el desarrollo de uno o más prototipos de leyes sobre derecho de autor para los países en desarrollo. Aunque al comienzo del actual programa se había expresado la opinión de que deberían prepararse prototipos de leyes separados para los países en desarrollo de habla francesa y de habla inglesa, algunos expertos africanos que participaron en el Seminario Africano sobre la Propiedad Intelectual de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), celebrado en Nairobi en octubre de 1972, expresaron el deseo de que la OMPI y la UNESCO preparasen conjuntamente un proyecto único para los países africanos tanto de habla inglesa como de habla francesa. La Conferencia General de la UNESCO, en su 17a. reunión, también se manifestó partidaria de un proyecto único e independiente de los idiomas de los países interesados. En esas circunstancias, la Oficina Internacional de la OMPI cooperó con la Secretaría de la UNESCO en la preparación del proyecto preliminar de dicho texto único, en el que se tomaron en cuenta varios proyectos anteriores de prototipos de leyes. A principios de 1973, la Secretaría de la UNESCO y la Oficina Internacional de la OMPI presentaron el proyecto preliminar de legislación prototipo a los gobiernos de los Estados miembros de la UNESCO y de la Unión de Berna, a las organizaciones no gubernamentales internacionales interesadas y a un grupo de trabajo de consultores africanos para obtener sus observaciones. Este último grupo se reunió en Ginebra del 19 al 21 de marzo de 1973.

ii) Convención internacional sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión (Convención de Roma)

En la tercera reunión ordinaria del Comité Intergubernamental de la Convención de Roma (Ginebra, 1 y 2 de noviembre de 1971) se aprobó la idea presentada en la reunión anterior de preparar un proyecto de ley tipo para facilitar la aplicación de la Convención de Roma o la adhesión a la misma. A ese efecto, el Comité decidió que su Secretaría debía preparar un texto en consulta con un número limitado de expertos, que dicho texto se debía enviar a los Estados partes en la Convención de Roma y a las organizaciones internacionales no gubernamentales interesadas para obtener sus observaciones y que el Comité debía considerar en su próxima reunión el texto y cualquier observación que se hubiera recibido sobre el mismo.

En el orden del día de la reunión extraordinaria del Comité Intergubernamental celebrada en Ginebra el 21 y el 22 de septiembre de 1972, se incluyó un informe sobre la marcha de los trabajos de preparación de un proyecto de ley tipo. Como se indicó en el informe sobre dicha reunión ordinaria (ILO UNESCO/WIPO/ICR/1972/EX/6): "El Comité reconoció las dificultades que entrañaba la preparación del proyecto de ley tipo, pero consideró que debía seguirse tratando de llegar a un texto lo más sencillo posible, tomando en consideración, cuando fuere necesario, las distintas tradiciones jurídicas y presentando las posibilidades que parecieran oportunas ...". La UNESCO preparó un proyecto preliminar de ley tipo relativa a la Convención de Roma y solicitó a diversas organizaciones no gubernamentales internacionales que formularan sus observaciones para que le sirvieran de guía en la etapa siguiente de redacción.

iii) Convenio para la protección de los productores de fonogramas contra la reproducción no autorizada de sus fonogramas

Cuando los Comités Preparatorios Ad Hoc establecidos para revisar la Convención Universal y la Convención de Berna se reunieron en mayo de 1970, se señaló a su atención la necesidad de estudiar las medidas que debían adoptarse para prohibir la producción y la importación de grabaciones no autorizadas. Posteriormente, el Comité Intergubernamental de Derecho de Autor y el Comité Permanente de la Unión de Berna, en sus reuniones celebradas en septiembre de 1970, expresaron su preocupación por la piratería difundida y creciente de los fonogramas y por el perjuicio que ello ocasionaba a los intereses de los autores, artistas intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas. En los dos Comités se manifestó el deseo de que los Directores Generales de la UNESCO y de la OMPI, convocasen a un Comité de expertos gubernamentales con el fin de preparar un proyecto de instrumento internacional para proteger a los productores de fonogramas de la reproducción no autorizada de sus programas. La convocatoria de estos expertos fue aprobada por los órganos competentes de la UNESCO y de la OMPI, y un Comité de expertos gubernamentales sobre la protección de fonogramas se reunió del 1.º al 5 de marzo de 1971. Al finalizar sus tareas, el Comité aprobó un proyecto de Convenio para la protección de los productores de fonogramas contra la reproducción no autorizada que sirvió de base para las deliberaciones celebradas en la Conferencia Internacional de Estados sobre la Protección de Fonogramas, convocada conjuntamente por la UNESCO

y por la OMPI en Ginebra, del 18 al 29 de octubre de 1971. El Convenio para la protección de los productores de fonogramas contra la reproducción no autorizada de sus fonogramas fue aprobado por la Conferencia el 29 de octubre de 1971 y entró en vigor el 18 de abril de 1973.

iv) Convención propuesta en relación con la distribución de señales portadoras de programas comunicados por satélites

En cumplimiento de las decisiones adoptadas por la Conferencia General de la UNESCO y por el Comité Permanente de la Unión de Berna, los Directores Generales de la UNESCO y de la OMPI convocaron un Comité de expertos gubernamentales en Lausana (Suiza), del 21 al 30 de abril de 1971. El objeto de esa reunión fue estudiar los problemas planteados por las transmisiones mediante satélites en el campo del derecho de autor y de la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión y, en particular, especificar si la protección de las señales de televisión transmitidas por satélites de comunicaciones exigiría que se modificasen las convenciones existentes o que se preparase un nuevo instrumento internacional.

Luego de escuchar los argumentos en pro y en contra de diversos enfoques, el Comité procedió a elaborar el proyecto de texto de una nueva Convención sobre el tema, pero llegó a la conclusión de que el asunto aún no estaba maduro para una conferencia diplomática. Por lo tanto, expresó el deseo de que "el Comité de expertos se reuniera por lo menos una vez más a fin de procurar un mayor grado de reconciliación entre las posiciones de los gobiernos y de los círculos interesados".

El segundo Comité de expertos gubernamentales fue convocado en la sede de la UNESCO, París, del 9 al 17 de mayo de 1972, por los Directores Generales de la UNESCO y la OMPI. Luego de un debate general que se asemejó mucho al celebrado en Lausana, la mayoría de las delegaciones, incluidas aquellas que hubiesen preferido resolver la cuestión en el contexto de la Convención de Roma, se declararon dispuestas a cooperar en la elaboración de un nuevo tratado independiente. Quedó entendido que, en el caso de aprobarse cualquier nuevo tratado de ese tipo, éste no debería perjudicar la aceptación más amplia de la Convención de Roma.

Después de examinar artículo por artículo el proyecto de convención preparado por el primer Comité de expertos, el segundo Comité preparó un nuevo proyecto que incluía varias modificaciones importantes. Los cambios más notables se relacionaban con la naturaleza de las obligaciones que habrían de contraer los Estados Contratantes y la protección de los intereses de los autores y artistas intérpretes o ejecutantes. Al concluir sus deliberaciones, el Comité aprobó una resolución en la que recomendaba que una vez que las secretarías de la UNESCO y la OMPI hubiesen preparado notas explicatorias sobre el proyecto de convención y que los gobiernos y organizaciones interesados hubiesen formulado sus observaciones, se debía convocar un tercer Comité de expertos gubernamentales en 1973.



Extensión de la protección de los derechos intelectuales a nuevas categorías de beneficiarios y a la luz de las nuevas técnicas de comunicación

i) Traductores

La UNESCO ha realizado estudios sobre los derechos legales de los traductores y el ejercicio efectivo de los derechos de los traductores según las leyes y reglamentaciones nacionales. Un comité de expertos se reunió en septiembre de 1968 para examinar la situación jurídica y práctica de los traductores a la luz de esos estudios y para presentar recomendaciones tendientes a mejorar el estatuto de esta categoría de trabajadores intelectuales. Las recomendaciones aprobadas luego de dichas deliberaciones comprenden la asociación del traductor en la mayor medida posible con los resultados del uso dado a su trabajo y el reconocimiento y salvaguarda de sus derechos morales, así como el establecimiento de contratos uniformes entre los traductores y los editores u otros usuarios.

En una carta del 10 de abril de 1969, el Director General de la UNESCO transmitió el informe y las recomendaciones del Comité de expertos a los Estados miembros, invitándoles a presentar sus propias observaciones y en particular a señalar si deseaban que la Conferencia General aprobase reglamentaciones internacionales sobre el tema. Los resultados del informe y las investigaciones fueron presentados al Consejo Ejecutivo en su 89a. reunión (julio 1972) y a la Conferencia General en su 17a. reunión. Esta última, por su resolución 5.141, decidió aplazar hasta su 18a. reunión el examen de la conveniencia de aprobar un instrumento internacional sobre la protección de los traductores, e invitó en el ínterin al Director General a preparar y presentar un informe sobre la utilidad y la conveniencia de un instrumento de ese tipo, sobre la amplitud y alcance que podría tener y sobre el procedimiento de enfoque.

ii) Reproducción fotográfica

El uso cada vez mayor y el rápido desarrollo de medios modernos de reproducción fotográfica en las bibliotecas, los centros de documentación y las instituciones científicas plantean interrogantes importantes en relación con el derecho de autor. El punto capital del problema consiste en armonizar la necesidad de difundir lo más posible las obras con las normas establecidas por la legislación nacional sobre la propiedad literaria y artística, el interés del público y el interés de los autores y editores. El Comité Intergubernamental de Derecho de Autor y el Comité Ejecutivo de la Unión de Berna, en sus reuniones conjuntas celebradas en 1971, aprobaron resoluciones idénticas (Resolución 62 (XI)) en las que se declaraba entre otras cosas, que si bien consideraban que la cuestión de la reproducción fotográfica de las obras protegidas por derecho de autor debería ser regulada a nivel internacional mediante una recomendación, opinaban que la cuestión no estaba aún madura para una reglamentación internacional y que debía ser estudiada más ampliamente por las secretarías de la UNESCO y de la OMPI, con la asistencia de expertos procedentes de países desarrollados y en desarrollo, a los efectos de formular propuestas sobre la materia en la primera mitad de 1973. Expresaron además el deseo que dichas propuestas les fuesen remitidas durante sus reuniones conjuntas en 1973.

/...

En cumplimiento de estas resoluciones, así como de la resolución 5.151, aprobada por la Conferencia General de la UNESCO en su 17a. reunión, celebrada en 1972, se reunió un Grupo de Trabajo bajo los auspicios conjuntos de la UNESCO y de la OMPI, en la sede de la UNESCO, París, del 2 al 4 de mayo de 1973. El Grupo de Trabajo estaba integrado por delegados de organizaciones internacionales que representaban por una parte a los autores y a los editores y por la otra a los usuarios de equipo de reproducción fotográfica. Además, cuatro especialistas en problemas de reproducción fotográfica, incluidos tres especialistas de países en desarrollo, fueron adscritos a la secretaría de la reunión como consultores. A raíz de sus deliberaciones, el Grupo de Trabajo aprobó una serie de recomendaciones. A modo de conclusión respecto de esas recomendaciones, el Grupo de Trabajo hizo constar la opinión de que "era factible y conveniente ... establecer un instrumento internacional concebido como una recomendación a los Estados, que siguiera las directrices arriba indicadas por el Grupo de Trabajo".

iii) Computadoras

Los problemas relacionados con el derecho de autor que plantea el desarrollo de la tecnología de computadoras son múltiples y variados. Algunas cuestiones tales como la eventualidad de que los programas que controlan o acondicionan las computadoras estén protegidos por el derecho de autor y de que una computadora pueda intervenir en la creación de una obra han sido objeto de medidas legislativas y judiciales en muchos países, y han sido analizadas en numerosos artículos. La UNESCO y la OMPI encargaron un estudio sobre un aspecto de esa cuestión, a saber, los problemas de derecho de autor que originan el almacenamiento en computadoras de obras protegidas y su recuperación, para someterlo a la reunión conjunta del Comité Intergubernamental de Derecho de Autor de la Convención Universal de Derecho de Autor y del Comité Ejecutivo de la Unión de Berna (B/EC/ES/4-IGC/XI/6, 4 de octubre de 1971). El autor de ese estudio, el Profesor Eugen Ulmer, subrayó que en su opinión, "la cuestión esencial en lo que se refiere al derecho de autor es la de saber si los que han adquirido ese derecho pueden controlar la alimentación de un sistema de computadoras o solamente los resultados, así como en qué medida las Convenciones internacionales reglamentan esta cuestión" (IGC/XI/14, París, 14 de enero de 1972, página 5).

Centro Internacional de Información sobre el Derecho de Autor

El acceso a las obras protegidas es un factor esencial en el desarrollo. Se convino en ello en las diversas reuniones regionales de expertos organizadas por la UNESCO en la ejecución de un plan a largo plazo para ayudar a los países en desarrollo a aumentar sus actividades de publicación y de radiodifusión a nivel nacional. En todos los casos, resultó evidente que la dificultad en obtener la autorización necesaria para publicar una obra localmente es uno de los motivos principales de la seria escasez de libros. Otro de los factores que frenan la producción interna de libros es la necesidad de pagar derechos de autor para reimprimir, traducir o adaptar obras extranjeras. El pago se hace aún más difícil porque debe realizarse en moneda extranjera.

/...

La Conferencia General ya había manifestado su preocupación a este respecto en su 15a. reunión, cuando aprobó una resolución en que se trataba de facilitar el acceso a las obras protegidas (15C/Resolución 5.121). La cuestión fue examinada nuevamente en Washington en 1969 por el Grupo Mixto de Estudio sobre el Derecho internacional de autor, que recomendó que la UNESCO "estableciera tan pronto como fuera posible un centro internacional de información sobre el derecho de autor".

En cumplimiento de esa recomendación, la Conferencia General autorizó al Director General por su resolución 4.122, aprobada en su 16a. reunión, "a establecer y administrar un Centro Internacional de Información sobre el Derecho de Autor relativo a los libros".

Las principales funciones del Centro Internacional de Información de la UNESCO sobre el Derecho de Autor son las siguientes:

1. Recoger información sobre el derecho de autor relativa a los libros que se puedan poner al alcance de los países en desarrollo en los términos más favorables posibles;
2. Disponer lo necesario para traspasar a los países en desarrollo los derechos cedidos por los que hayan adquirido derecho de autor;
3. Ayudar a desarrollar formularios sencillos de contratos en relación con los derechos de traducción, reimpresión y otros derechos requeridos por los países en desarrollo;
4. Estudiar los medios de conseguir el derecho de autor y otros derechos cuando no se disponga de moneda extranjera;
5. Promover acuerdos para la adaptación y la publicación de obras, particularmente las de naturaleza técnica y educacional.

#### Servicio de información especializada

La División de Derecho de Autor de la UNESCO es un centro de información y documentación capaz de proporcionar a los Estados miembros y a los especialistas información actualizada sobre las Convenciones internacionales y las leyes nacionales y sobre la teoría y la práctica jurídicas actuales con relación a los diferentes problemas que plantea el derecho de autor y los llamados derechos conexos. Este servicio se presta por correspondencia y mediante consulta personal, así como a través de tres publicaciones informativas: el "Boletín de Derecho de Autor" (publicación trimestral que aparece en español, francés e inglés); el "Repertorio Universal de Legislación y Convenios sobre Derecho de Autor", cuyas versiones en español, francés e inglés se actualizan regularmente; y la "Collection of Laws and Treaties concerning the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations", cuya versión inglesa apareció en 1969, mientras que la francesa se publicó en 1971.

IV. Medidas encaminadas a asegurar que disfrute de los derechos mencionados en la parte III supra una proporción cada vez mayor de la población, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición

Estas medidas se refieren fundamentalmente a la discriminación. Desearíamos señalar a la atención de la Comisión las siguientes actividades:

a) El UNESCO report on Apartheid: its Effects on Education, Science, Culture and Information (edición revisada: 1972).

b) Le Racisme devant la Science 1/. Una nueva edición y un libro sustancialmente distinto (1973).

c) Dos estudios sobre las relaciones entre los grupos étnicos en Africa relativos al Senegal y la República Unida de Tanzania (1973) 2/.

d) El papel de los medios de información en una sociedad multirracial: reunión de expertos (UNESCO, París, diciembre de 1969).

e) Race as News: se publicará en 1974-75 3/.

f) Portuguese Colonialism: its Effects on Education, Science, Culture and Information 4/. Se publicará en 1974.

g) El informe de la UNESCO sobre los efectos de la política de Rhodesia del Sur sobre la educación, la ciencia, la cultura y la información. Se publicará en 1974-75. En preparación.

h) La reunión de expertos sobre los conceptos de raza, personalidad propia y dignidad, UNESCO, París, 1972.

Dichas medidas tienen que ver también con la igualdad de acceso a la educación superior, cuestión a la que se ha prestado atención en las actividades de la División de Enseñanza Superior desde 1963. Más recientemente, en 1973, la División emprendió un estudio y publicó un trabajo en inglés y francés denominado Present problems in democratisation of secondary and higher education. El problema fue estudiado también en el contexto europeo como preparación para la Segunda Conferencia de Ministros de Educación de los Estados Miembros de Europa (Bucarest, noviembre y diciembre de 1973).

---

1/ Por Lévi-Strauss, Dubinin, Beteille y colaboradores.

2/ Por Diarra y Fougeyrollas, Mbilinyi, Ghai y colaboradores.

3/ Por Halloran, Klineberg, Guillaumin y colaboradores.

4/ Por Sousa Ferreira con una introducción de Davidson.

El concepto de diferenciación implica el establecimiento de distinciones de todo tipo respecto de un individuo. Se sostiene que son características que se desarrollan bajo la presión de moldes sociales predeterminados.

La supresión o el cambio de características puramente individuales a través de influencias externas debe considerarse una violación del principio de la libertad. Con miras a asegurar el derecho a la igualdad de acceso a la educación superior sobre la base de la capacidad o el mérito, los sistemas de educación superior están siendo reformados a fin de proporcionar medios en lo tocante a los métodos, el contenido y las estructuras generales, tanto para los estudiantes comunes como para aquellos que trabajan.

Cabría mencionar asimismo el desarrollo de situaciones de aprendizaje por cuenta propia o independientemente; se ha previsto que los nuevos métodos, recursos y técnicas de educación, difundidos a través de distintos medios de información, ayuden a los que se han visto privados de la educación superior, ya sea por su origen social o por condiciones económicas. En algunas facultades de las universidades y en ciertos contextos nacionales, el ingreso en la educación superior es selectivo, pero los sistemas están cambiando en otras facultades y en determinadas situaciones nacionales son bien conocidos los procesos de evaluación de las cualidades y los procedimientos de asistencia a los alumnos meritorios que ingresan en la educación superior.

Es pertinente referirse especialmente en este contexto a dos recomendaciones de la segunda Conferencia de Ministros de Educación de los Estados Miembros de Europa (Bucarest - 26 de noviembre a 3 de diciembre de 1973). Ellas son las siguientes: Título. Concepto ampliado de la educación superior: (Recomendación No. I/1).

"El desarrollo económico y cultural general conducirá a una mayor demanda de educación superior, como consecuencia del desarrollo del sistema de enseñanza secundaria. El desarrollo de la educación superior debe, por lo tanto, considerarse dentro del contexto del conjunto del sistema educativo;

En atención a tales circunstancias y en relación con el importante papel de la educación superior en un contexto social y democrático, la ampliación del acceso a la educación superior parece ser una consecuencia inevitable. Deben eliminarse los obstáculos existentes y en principio, todo tipo de formación dispensada por las escuelas secundarias, lo mismo que la experiencia correspondiente adquirida en el marco de la actividad profesional, debe permitir ingresar en la educación superior. Dentro de esas perspectivas, es evidente que el concepto de educación superior debe concebirse de una manera mucho más amplia que la tradicional;"

...

"Recomienda a los Estados miembros y, en particular a las universidades que establezcan una integración vertical del sistema escolar y abran las universidades a todas las categorías de la población exigiendo a los candidatos conocimientos equivalentes y teniendo en cuenta sus aptitudes intelectuales generales;

/...

Recomienda a las universidades una mayor apertura hacia la sociedad, la economía y otras actividades, así como una estrecha cooperación mutua para procurar seguir estableciendo un sistema coordinado de educación permanente y para formular criterios destinados a evaluar la educación permanente."

Título: Democratización de la enseñanza superior: (Recomendación No. I/2)

"Afirmando que proseguir la democratización de la enseñanza superior es una de las condiciones primordiales del desarrollo socioeconómico,

Reafirmando que la igualdad de acceso de las minorías nacionales, donde éstas existan, a la educación, incluida la enseñanza superior, es un derecho inalienable,

Pide a todos los Estados Miembros que eliminen en la enseñanza superior, todas las formas de discriminación basadas en la raza, el sexo, la edad, la lengua, la religión, las opiniones políticas, la condición social y la situación económica, donde aquéllas existan todavía;"

V. Dificultades con que se ha tropezado al asegurar el disfrute de los derechos mencionados en la sección III supra, y medidas y métodos adoptados para vencerlas

Existen dos tipos de dificultades:

a) La falta de recursos de algunos Estados miembros. Esto dificulta la aplicación de numerosos derechos económicos y sociales, por ejemplo, el derecho al empleo, a la seguridad social, o aún a la educación.

b) Los problemas de una organización intergubernamental. Es relativamente fácil saber qué derechos reconoce la ley. La mayoría de las naciones los incluyen en sus constituciones. Pero pasar de la ley a la realidad es más difícil. Existe una tensión intrínseca entre los derechos de los gobiernos, tal como ellos los interpretan y los derechos humanos individuales o los derechos de los grupos menos privilegiados o no dominantes de cualquier Estado.

Poco podemos hacer acerca de a), salvo introducir pequeños cambios en la distribución de la asistencia. Por lo que respecta a b), hemos tratado de obrar con la mayor integridad académica posible, manteniéndonos al mismo tiempo dentro de los límites que nos han fijado nuestros órganos rectores.

-----